

Educación y política

A 50 años del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular

Dante Castillo* y Mario Torres**

Mucho se ha escrito sobre la singularidad del gobierno encabezado por Salvador Allende, el carácter profundamente popular es sin duda el rasgo más destacado y original de su gestión. Una característica que indudablemente es generalizable entre las sociedades capitalistas y socialistas de la época. De esta manera, los cincuenta años que se conmemora este año 2023, es la clausura del proyecto económico, político y social más democrático de la historia nacional y mundial.

El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, recuerda una de las reacciones más decididas y sangrientas con las que las instituciones del capitalismo mundial golpean un proyecto político. El hecho que mediante un mecanismo electoral y democrático se eligiera un gobierno socialista, marxista en un país "occidental", era un gran riesgo a la geopolítica mundial de la época.

Pese a las diferencias estructurales que marcan a la sociedad chilena de los años sesenta y setenta con la actual, la muerte de Salvador Allende es el término del primer y último gobierno con una demostrable participación popular.

Al mismo tiempo, la transparencia con las que el discurso de la Unidad Popular manifestaba sus opciones ideológicas, son impensables para la retórica y la estética actual. Por ejemplo, el Programa de Gobierno de Allende se sustenta en el siguiente diagnóstico: "Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente".

De igual forma, la propuesta contenida en el compromiso de gobierno también señalaba que: "Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo".

En la esfera de la educación, hasta el arribo del régimen militar, por decreto y por la ratificación de un sinnúmero de ajustes normativos escalonados, la transformación del sistema educacional no descansó exclusivamente en las propuestas de los equipos técnicos. Por el contrario, las reformas fueron estudiadas, discutidas, decididas y ejecutadas por las organizaciones del profesorado, de los trabajadores, del estudiantado y de los padres, madres y apode-

rados. Todo lo anterior, respetando los marcos legales declarados en planificación nacional.

Al mismo tiempo, el gobierno de Allende consideraba que la dirección ejecutiva del Ministerio de Educación debía considerar la participación efectiva de las organizaciones sociales integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacionales. De esta forma el sistema escolar planificaba respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.

Mientras que, en el caso de la educación superior, se gestionaba considerando los conceptos de democracia, y autonomía de la Universidad. El Gobierno de Unidad Popular prestaba un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria iniciado con antelación, impulsando resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se tradujo en importantes aportes de las universidades al desarrollo "revolucionario" propuesto por el Estado popular. Por otra parte, se reorientaron muchas funciones académicas de docencia, investigación y extensión, considerando expresamente dar respuesta a los grandes problemas nacionales. Acciones que, a diferencia de lo observado en las administraciones posteriores al Gobierno de Allende, fueron alentadas y apoyadas por el Estado. De esta forma, la educación superior sincronizó la ciencia y la docencia con el compromiso político. La educación superior se constituyó en una extensión del debate y la acción ideológica.

Es bajo la administración de la Unidad Popular que incluso la Universidad Católica de Chile (PUC), en marzo de 1971, crea el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), reconociendo que las investigaciones educacionales constituyen un campo de actividad de creciente importancia para abordar los dilemas y desafíos de la época. Al mismo tiempo, devela el rol que cumple la educación en el desarrollo y transformación de las sociedades. Pero lo más destacado dice relación con la gobernanza que las autoridades de la PUC le confieren al PIIE, pues, aunque administrativamente dependía de la Vicerrectoría Académica, es interesante señalar que la política general del PIIE era acompañada por un Consejo Asesor ampliado que incluía a representantes del Ministerio de Educación, del Consejo de Rectores, de la UNESCO, de organizaciones sindicales obreras y campesinas y de otros organismos vin-



Guillermo Núñez, 2017

culados a la educación. Al mismo tiempo, este Consejo Asesor externo era independiente para revisar periódicamente las actividades de investigación y de docencia del PIIE. Al mismo tiempo, tenía como propósito proponer objetivos, identificar problemas y sugerir metodologías que respondieran a las temáticas educacionales del país. En otras palabras, hasta la Universidad privada más grande y prestigiosa de la época, incluía la participación popular.

A diferencia de lo que ocurre ahora, la educación era reconocida y aceptada en su dimensión política, tal como lo hace la epistemología de Paulo Freire o cualquier marco conceptual de las Ciencias Políticas. Es por lo que, otro atributo del gobierno de la Unidad Popular que también lo hace único, es el hecho de mostrar que la educación no es neutra o puramente técnica.

Hoy solo en la esfera individual y privada las autoridades gubernamentales aceptan el contenido político de la educación. Pero, al enfrentarse a la esfera pública, alientan un discurso que los identifique exclusivamente como expertos y gestores técnicos y científicos, sabiendo íntimamente que es imposible arrancarle el componente político a la ciencia y a la educación.

Actualmente, estamos sometidos a gobiernos que difícilmente pueden enfrentarse al discurso totalitario que ha instalado la democracia neoliberal. El golpe militar de hace 50 años inició el proceso que terminó por arrebatarle y desprestigiar el debate político en educación. Incluso la actual libertad de cátedra universitaria no es más que una figura fantasmagórica de lo que vivió en el gobierno de Allende. A la fecha, la libertad de cátedra, que aseguraba la discusión política, no es más que una quimera mediada por las leyes del mercado, por la disputa en la captación de estudiantado dispuesto a pagar o por la evaluación tecnocrática a la que se somete al profesorado universitario.

Por el momento, aún no han llegado los hombres y las mujeres que superen el momento gris y amargo, que impuso el golpe militar de 1973. A 50 años de esta fatídica fecha, seguimos a la espera del vaticinio de Salvador Allende: "Sigam ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". ■

*Investigador PIIE. **Académico UTEM.